

Guerra fría y defensa del *statu quo* (1946-1957)

El mundo de la posguerra

Durante la guerra contra el nazi-fascismo, la democracia capitalista y el socialismo de tipo marxista-leninista pudieron constituir una gran alianza, olvidando temporalmente sus diferencias frente al enemigo común. En la creencia de que, luego de la derrota de Hitler y Japón, su alianza podría perdurar, los Tres Grandes crearon la Organización de las Naciones Unidas con su directorio de cinco potencias dirigentes. Pero la unidad y la cohesión de dicho directorio ya estaba resquebrajada en el momento en que formalmente se estableció. Apenas vencidos Alemania y Japón, volvió a estallar el inevitable antagonismo entre los sistemas capitalista y socialista, combinado con la tradicional rivalidad internacional entre rusos y angloamericanos.

La guerra había dejado grandes "vacíos de poder". Por el momento, el gran peso político, económico y militar de Alemania había desaparecido del mapa. Inglaterra, victoriosa pero extenuada, había perdido su rango de primera potencia y no era capaz de mantener su dominación sobre su vasto imperio. Francia había descendido sin más dramáticamente. Estados Unidos, en cambio, había subido al primer puesto entre los imperios del mundo: sin haber sufrido destrucciones en su propio territorio, e inmediatamente fortalecido en los planos económico, político y militar, luego de breves vacilaciones, fue asumiendo el papel —anteriormente desempeñado por los británicos— de guardianes y dominadores de los mares. La URSS por su parte, no distante de haber perdido a 20 millones de habitantes y la casi totalidad de su industria al oeste de los Urales, poseía los recursos humanos, materiales, morales e intelectuales necesarios para ocupar el puesto de segunda potencia del mundo con la expansión y el fortalecimiento de su control sobre gran parte de la masa continental de Eurasia.

Se inició por rápidas etapas el proceso de deterioro de la Gran Alianza y de marcha hacia la guerra fría: confrontación entre el capitalismo y el socialismo y, al mismo tiempo, pugna entre dos grandes potencias que, por la forma, aunque no por el contenido social de su conflicto, continuaron las estrategias trazadas en el pasado por el Imperio Británico y la Rusia Zarista, respectivamente.

Los conflictos entre las dos potencias comenzaron en el segundo semestre de 1945 y se agravaron en 1946. La guerra civil griega, el problema de los Estrechos, la cuestión de Irán, la progresiva soviétización de Europa oriental y los desacuerdos sobre Alemania determinaron el rumbo general de los acontecimientos. Ya en 1946 Churchill hablaba de "guerra fría" y de "cortina de hierro". En 1947 se proclamó la Doctrina Truman y se lanzó el Plan Marshall.

En 1948 comenzó de lleno la etapa de la guerra fría. Occidente procedió a crear la OTAN, y Stalin soviétizó la Europa centro-oriental a través de los partidos del

Cominform. Las dos Alemanias se separaron de manera definitiva con sus respectivos gobiernos: uno basado en el capitalismo, y otro en el socialismo centralista. En China, Mao Tse-Tung inició la gran ofensiva que en 1949 culminaría con un triunfo completo. Ese mismo año ocurrió el bloqueo de Berlín, y de 1950 a 1952 la guerra fría alcanzó su etapa más tensa y peligrosa con el conflicto de Corea.

En 1953, la muerte de Stalin, la tregua en Corea y el equilibrio nuclear determinaron el inicio de una nueva fase, la de estabilización o "institucionalización" de la guerra fría, con un comienzo de distensión y el surgimiento de fuerzas no alineadas. Pero hasta 1957 se mantuvo firme la división bipolar del mundo.

En ese ambiente mundial, obviamente la potencia norteamericana prosiguió incluir a América Latina en su sistema estratégico para la lucha contra el "comunismo internacional" impulsado por los gobernantes de Moscú. En la etapa 1946-1947 todavía fueron leves y vacilantes las presiones ejercidas por Washington para enmarcar a Latinoamérica firmemente en el bloque occidental. A partir de 1948 dichas presiones se tornaron decididas y fuertes. Estados Unidos comenzó a apoyar las tendencias dictatoriales de derecha para acabar violentamente con movimientos latinoamericanos de liberación nacional y social surgidos a partir de 1943.

Movimientos nacionalistas y democráticos en Latinoamérica

Ya se señaló en el capítulo anterior que la Segunda Guerra Mundial ejerció un efecto estimulante sobre el nacionalismo de los pueblos latinoamericanos. En primer lugar, la elevada demanda de materias primas por parte de Estados Unidos trajo prosperidad y alentó la formación de capital nacional en los Estados Unidos al sur del Río Bravo. En segundo término, la escasez de artículos de consumo manufacturados en Estados Unidos impulsó y obligó a las burguesías latinoamericanas a crear industrias manufactureras. Con la formación de núcleos industriales se originaron sectores empresariales nacionales, por el momento independientes del capital extranjero. También surgieron nuevos sectores profesionales y técnicos que, junto con los mencionados empresarios, integraron clases burguesas nacionales. Por el otro lado, creció el número de los obreros latinoamericanos y éstos, estimulados por las condiciones económicas favorables y por la ideología democrática y antifascista predominante, constituyeron sindicatos y lucharon por sus derechos.

Por otra parte, los intelectuales latinoamericanos durante los años 1936-1945 —desde el estallido de la guerra civil española hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial— vivieron bajo la influencia del pensamiento progresista mundial. Las luchas antifascistas de Europa los alentaron a emprender el combate contra las fuerzas reaccionarias y opresivas del hemisferio occidental. Ese fenómeno de creciente despertar de conciencias democráticas y patrióticas se unió al factor objetivo del fortalecimiento de empresarios nacionales, nuevas capas medias y clase obrera.

La "Revolución Militar" argentina de 1943, pese a su carácter ideológico semifascista, reflejó en parte los intentos de ascenso de las clases medias renovadoras. En el mismo año, el golpe boliviano de Gualberto Villarreal contra la "rosca" minera y latifundista, que masacró a los obreros en 1942, constituyó otro acto

orientado hacia el cambio social y la liberación de Bolivia del control de consorcios extranjeros.

En 1944 ocurrió un levantamiento democrático y nacionalista en Guatemala. El Partido Revolucionario Guatemalteco, agrupación de capas medias a la cabeza de campesinos y obreros, tomó el poder con la ayuda de sectores militares democráticos y, bajo la jefatura de Juan José Arévalo, adoptó medidas reformistas, y elaboró planes para liberar al país de la dominación de la United Fruit Company, así como para fortalecer la posición del pueblo frente a la oligarquía.

En 1945, en Venezuela se llevó a cabo el movimiento revolucionario cívico-militar del 18 de octubre de 1945, que también formó parte de la ola general de cambios nacionalistas y populares en América Latina. Ese movimiento puso fin a 40 años de hegemonía de mandatarios procedentes de la región andina de Venezuela, hegemonía que tuvo el efecto de unificar y centralizar al país pero benefició primordialmente a las transnacionales petroleras y a una oligarquía latifundista e importadora. Aunque el presidente Isaias Medina Angarita, último heredero político del régimen "andino", fue liberal y benévolo, el golpe revolucionario de octubre de 1945 significó un cambio progresista. El movimiento cívico-militar movilizó al pueblo, lo llevó a participar en la política, desplazó a la oligarquía terrateniente del poder fundamental y elevó a dominante a una burguesía empresarial que surgió de las capas medias promotoras o simpatizantes del alzamiento de octubre.

En 1946 fue elegido Juan Domingo Perón para la presidencia de la nación argentina. En forma autoritaria e ideológicamente confusa, el caudillo argentino encabezó el mismo proceso de ascenso popular y nacionalista que se dio en Guatemala y en Venezuela. Paradójicamente, el hecho de que Argentina estuviera estructural y culturalmente más avanzada que los dos países mencionados no se reflejó en la evolución de sus ideas políticas predominantes. Si los movimientos populares guatemalteco y venezolano actuaron en nombre de claros principios socialdemócratas, en cambio el populismo peronista sufría de las taras del personalismo, del abuso del poder, y de una indigesta mezcla de ideas de origen fascista con otras de tipo socialdemócrata. Para aquella época, casi ningún demócrata o progresista latinoamericano entendió que el peronismo era, pese a todas sus fallas, un movimiento hacia la liberación de la nación y del pueblo argentino, y se tendió a atacar y condenar a Perón como "fascista" y "reaccionario".

Lo mismo era cierto en el caso del caudillo boliviano Gualberto Villarreal. Lo respaldaba totalmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Batensoro. Igualmente, los trotskistas tuvieron frente a Villarreal una actitud comprensiva. En cambio las izquierdas y los demócratas avanzados de otros países latinoamericanos —así como los comunistas bolivianos de tendencia stalinista— atacaban a Villarreal y lo consideraban "nazi". En 1946, cuando la oligarquía derrocó al mandatario nacionalista y lo colgó en la Plaza Murillo, pocos demócratas del exterior entendieron la significación reaccionaria del hecho.

Guerra fría y auge dictatorial (1948-1957)

Desde 1948, el gobierno norteamericano se inclinó en una dirección represiva hacia América Latina y los países periféricos del "mundo libre" en general. Ante la

confrontación cada día más neta con la Unión Soviética, y el peligro de que la guerra fría se convirtiera en caliente, los estrategas de Washington dejaron de pensar en términos de difusión de sus ideas por la vía reformista, y comenzaron a abogar el establecimiento de regímenes de fuerza procapitalistas y antizquierdistas en los países subdesarrollados. El presidente Harry Truman, hasta el fin de su segundo mandato en 1953, siguió simpatizando con las fuerzas democráticas exteriores pero no impidió que sus servicios de inteligencia militar conspiraran contra gobiernos constitucionales y apoyaran golpes de derecha. El ascenso en 1953 del presidente Dwight D. Eisenhower y de su canciller John Foster Dulles inclinó la balanza totalmente hacia el productarismo.

En su política conservadora y represiva hacia América Latina, Estados Unidos trató de valerse de dos instrumentos y mecanismos adoptados por la comunidad interamericana en los años 1947 y 1948: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El TIAR había sido suscrito en Río de Janeiro durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continental celebrada entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1947. En esa reunión se había discutido la aplicación de los principios de Chapultepec, que preveían la creación de un mecanismo multilateral de defensa contra agresiones extra e intracontinentales que sustituyese la Doctrina Monroe. Los Estados latinoamericanos esperaban que ese Tratado sirviese de garantía contra eventuales ataques de sus vecinos y había contra intentos intervencionistas de la potencia del Norte. Esta, por su parte, lo miraba como parte de su aparato estratégico anticomunista: lo que sería la OTAN para unir a Norteamérica y Europa occidental contra el campo soviético, el TIAR lo sería —según Estados Unidos— para el hemisferio occidental.

Durante la discusión del proyecto del Tratado, Estados Unidos había propuesto que el TIAR tuviese efectos no sólo en caso de un ataque directo contra un país americano, sino hasta cuando fuere agredida una "base" de tal país fuera del ámbito hemisférico. Esa idea fue rechazada por los latinoamericanos, y se resolvió que sólo en caso de agresión directa contra el territorio de un país entrarían a funcionar de inmediato los mecanismos de acción conjunta; cuando el ataque se dirigiera contra una base extracontinental, sólo se procedería a reunir el órgano de consulta. Tres países que en aquel momento poseían gobiernos democráticos reformistas —Guatemala, Uruguay y Venezuela— habían propuesto que el TIAR previese la acción solidaria contra violaciones a los derechos humanos en el seno de los Estados americanos. Pese a las buenas intenciones, tal cláusula era susceptible de convertirse en instrumento intervencionista, y por ello México y otros países democráticos se opusieron a ella, como lo hicieron también, por motivos menos honorables, las dictaduras.

En 1948 se reunió en Bogotá la IX Conferencia Internacional Americana. Los países latinoamericanos democráticos y reformistas deseaban que se adoptara una Carta que echara las bases jurídicas para crear una comunidad americana sin hegemonías. Opinaban que al institucionalizarse el sistema interamericano sin organización regional de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas se hacía posible el manejo de dicho sistema por sus miembros latinoamericanos, obligándose al socio mayor a que acatase la voluntad de la mayoría y dejase de jugar un papel prepotente e intervencionista. El gobierno norteamericano, a su vez, temía iniciar

lo que la carta de la OEA pudiera resultar un impedimento al libre ejercicio de su poder nacional. Sin embargo, durante el proceso de redacción del proyecto de la carta y en la propia conferencia de Bogotá, la posición de Washington sufrió un cambio. Los gobernantes norteamericanos se dieron cuenta de que la realidad política garantizaba la continuación de su hegemonía sobre las Américas, y que la carta les era útil, recubriendo la fundamental desigualdad de los países americanos de un manto de igualdad formal. Estados Unidos confiaba en su capacidad para ejercer influencia determinante en el seno de la organización, no sólo a través de los medios tradicionales de presión en las relaciones bilaterales, sino también por medio del Consejo y la Unión Panamericana, con sede en Washington.

El TIAR y la OEA se basaban en cuatro principios jurídicos esenciales: 1) la no intervención; 2) la igualdad jurídica de los Estados; 3) el arreglo pacífico de las diferencias; y 4) la defensa colectiva contra agresiones. Como lo señala Jerome Slater (1967), los primeros dos principios implican la defensa de la soberanía de los Estados; los otros dos enfatizan la cooperación entre ellos. En ciertos momentos, esas dos ideas básicas se vuelven contradictorias en la práctica. En todo caso, las dos últimas pueden ser manejadas por la potencia hegemónica.

En esa época fue firmado el Pacto de Bogotá, instrumento jurídico que establece mecanismos de arreglo pacífico de diferendos. Ese pacto incorpora el contenido del Tratado Gondra de 1923, los pactos de conciliación y de arbitraje de 1929, el Tratado Zuveadra-Lamas de 1933, el Tratado de Buenos Oficios y Mediación de 1936, y otros. Así mismo, se resolvió crear la Comisión Interamericana de Paz, proyectada desde 1940.

La OEA funcionó como mecanismo de seguridad colectiva en unos pocos casos de conflictos entre países americanos. Entre 1957 y 1960 se ocupó de la disputa territorial fronteriza existente entre Honduras y Nicaragua. En 1957 estalló la lucha armada entre los dos Estados, y la OEA actuó para restablecer la paz. Eventualmente, el problema fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia que, en 1960, dictó un fallo favorable a Honduras. En 1948 el TIAR fue invocado ante un conflicto armado entre la dictadura nicaragüense y el régimen democrático de Costa Rica. La pugna entre los dos países se encendió de nuevo en 1955, y la OEA tomó medidas para restablecer la paz. En 1950 Haití invocó el TIAR cuando el régimen dominicano del dictador Trujillo dio apoyo a exiliados haitianos para tratar de derrocar al gobierno reformista de Dumarsais Estimé.

Desde 1948 en adelante el auge de la guerra fría llevó al gobierno norteamericano a colocar la seguridad militar y policial por encima de cualquier otra consideración en lo referente a los países subdesarrollados sometidos a su hegemonía. La política de "luz verde" a las corrientes autoritarias conservadoras, junto con la práctica de calificar de "comunistas" a todos los movimientos populares tendientes hacia la transformación del sistema social, hicieron posible el derrocamiento de los gobiernos democráticos de Venezuela y de Perú en 1948, y de Cuba en 1952, así como la adopción de medidas represivas antizquierdistas hasta por aquellos regímenes que formalmente mantenían su carácter constitucional. En la mayoría de los países de América se procedió a enviar a la clandestinidad a los partidos comunistas y otras agrupaciones radicales, bajo la influencia del macartismo que desbordaba los límites de Estados Unidos y llegó a dominar el hemisferio entero.

El auge dictatorial derechista fue resistido por los gobiernos democráticos que

quedaban en el poder, y en algunos casos surgieron conflictos violentos entre ellos y otros.

Cuando José Figueres, apoyado moralmente por los socialdemócratas de Venezuela y de Puerto Rico, tomó el poder en Costa Rica en 1948, de inmediato surgieron conflictos entre él y el dictador Somoza de Nicaragua. Las compañías bananeras norteamericanas y la oligarquía latifundista de Centroamérica temían Figueres por sus tendencias reformistas y favorables a los intereses de los trabajadores y las capas medias democráticas. El Departamento de Estado apreciaba al nuevo mandatario costarricense por su intenso anticomunismo, pero no así las compañías norteamericanas. Alentado por los grandes intereses económicos de Centroamérica y Estados Unidos, Somoza dio asilo y ayuda a costarricenses de derecha, enemigos de Figueres, que invadieron Costa Rica desde territorio nicaragüense en 1948. Costa Rica se dirigió a la OEA e invocó el Tratado de Río. La organización regional actuó prontamente, restableciendo la paz.

Sin embargo, el conflicto entre la democracia costarricense y la dictadura de Nicaragua estalló una vez más en 1955, invocándose nuevamente el TIAR y restableciéndose la paz. Al igual que en 1948, Estados Unidos tuvo una actitud imparcial, o quizás ligeramente inclinada a favor de Costa Rica. Si bien la Unión Fruit y demás compañías norteamericanas preferían al dictador feudal —quien les otorgaba enormes privilegios— y se oponían al reformista de San José, la Casa Blanca y el Departamento de Estado jugaban la carta del apoyo a un demócrata anticomunista que, en el fondo, garantizaba la estabilidad del sistema capitalista mejor que un reaccionario extremo.

El déspota dominicano Rafael Leonidas Trujillo había tenido conflictos con la Venezuela democrática de 1945-1948 y con sus vecinos haitianos. En 1946, Haití experimentó un ascenso de sus capas medias reformistas y democráticas, con amplio apoyo obrero y campesino, cuando llegó al poder el presidente Dumarsais Estimé. El tirano dominicano amparó en su país a exiliados haitianos de derecha y los ayudó en sus conspiraciones contra Estimé, socialdemócrata que —para los términos de la realidad de Haití— representaba una tendencia análoga a la de Betancourt en Venezuela y Figueres en Costa Rica. En 1949, Haití llevó ante la OEA su disputa con Santo Domingo, pidiendo que la organización regional usara sus buenos oficios para restablecer la armonía. La OEA actuó de conformidad con ese deseo y los dos países firmaron una declaración de amistad. Poco después, Trujillo respaldó una intentona contra Estimé, y Haití invocó el TIAR. Mientras se deliberaba sobre el caso, Estimé fue derrocado por el general Paul Magloire, de tendencia conservadora, y las relaciones haitiano-dominicanas se estabilizaron a partir de ese momento.

En agosto de 1948 Trujillo se dirigió a la OEA para denunciar una expedición de fuerzas revolucionarias democráticas dominicanas desde Cuba. En 1949 emitió una segunda denuncia en el mismo sentido. Cuba replicó invitando a la Comisión Interamericana de Paz a que realizara una investigación, pero la Comisión decidió que no había necesidad de ello.

En 1949 Estados Unidos se mostró preocupado por la actividad de la "Legión del Caribe" (un cuerpo armado que contaba con el apoyo de las fuerzas reformistas del área). Hasta hoy la historia de la legión se encuentra sumida en cierto misterio. Se presume que fue organizada y apoyada por Betancourt, Figueres, Muñoz Marín

y Pío Socarrás, además de sectores liberales norteamericanos. Su objetivo principal era derrocar a los dictadores reaccionarios del Caribe y, al mismo tiempo, impedir un fortalecimiento de los comunistas en la región. En 1949-1950 Estados Unidos llevó ante la OEA el problema global de la paz en el Caribe, y la organización regional, a través del Comité Interamericano de Paz, se expresó en el sentido de que era encomiable luchar por la democracia, pero que no había que hacer uso de las armas para ello.

Hasta 1953 Estados Unidos todavía toleraba rebeliones reformistas como la de Figueres, la situación mundial de guerra fría tendía a llevarlo cada vez más hacia una actitud "inmediatista" de respaldo a las acciones antiizquierdistas violentas y autoritarias. A partir del ascenso de Eisenhower y Dulles, la aprobación de las dictaduras se hizo evidente. Ante el caso del asilo de Haya de La Torre en la embajada colombiana en Lima —la dictadura de Odría le negaba salvoconducto y Colombia recurrió primero a la OEA y luego a la Corte Internacional de Justicia—, Estados Unidos asumió una actitud pasiva para no incomodar al dictador peruano, aunque el jefe máximo del APRA era conocido por su moderación y su anticomunismo.

Una excepción: la revolución boliviana

Pese al ambiente represivo general de los años 1948-1957, un acontecimiento de impacto revolucionario momentáneo se produjo durante esa época. Fue el caso de Bolivia, donde una corriente nacionalista radical movilizó a las masas para nacionalizar las minas y hacer la reforma agraria. Después de esos logros, el movimiento perdió su ímpetu inicial y fue dominado paulatinamente por el reformismo.

Después del derrocamiento de Gualberto Villarroel en 1946, la "rosca" de los barones del estaño y los latifundistas había vuelto a tomar el poder político en el país del altiplano. En las minas los obreros laboraban bajo condiciones inhumanas con salarios de hambre. En el agro, los campesinos continuaban sometidos al sistema del "pongueaje", es decir, eran siervos de la gleba, maltratados y vejados como en los primeros siglos de la colonia española.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo trabajaba clandestinamente para organizar cuadros entre los obreros, los campesinos y la clase media. Su programa era el de establecer un gobierno con esas tres clases populares, para nacionalizar las minas, hacer la reforma agraria, independizar el país del capital imperialista y redistribuir el ingreso. En el plano sindical, el Partido Obrero Revolucionario, trotskista, colaboraba tácitamente con el MNR.

En 1952 se celebraron elecciones en las cuales el MNR salió victorioso. Los detentadores del poder se negaron a reconocer los resultados comiciales. El MNR llamó al pueblo a las armas y se produjo una de las pocas revoluciones que hayan logrado imponerse en contra de todo el aparato del Estado, incluido el ejército tradicional. Los mineros formaron milicias y salieron al combate contra las tropas gubernamentales. Los campesinos se alzaron poderosamente en el medio rural. Súbitamente, después de siglos de esclavitud y servidumbre, el indio boliviano,

descendiente de los bravos guerreros aymarás de la época prehispánica, alzó el frente y se decidió a conquistar su dignidad humana o morir. Con dinamite, machetes y viejos fusiles, las milicias campesinas se unieron a las obreras y arremetieron contra el ejército de la "rosca". Tan masivo y heroico fue el levantamiento que el viejo orden político se derrumbó. Un gobierno revolucionario presido por Paz Estenssoro tomó el poder y disolvió el ejército tradicional por sustituirlo por milicias obreras y campesinas.

Poco después se decretó la nacionalización de las minas de estaño. De un estallido de plumazo, los tres barones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild, quedaron expropiados. Luego se procedió a decretar la reforma agraria. Ya los campesinos por su propia cuenta, habían comenzado a repartirse las tierras de los latifundistas en diversas regiones del país. El decreto expropió a todos los grandes terratenientes que ejercían una dominación de tipo netamente feudal; en cambio, quedaban exentos de expropiación aquellos que invertían para modernizar sus explotaciones y que establecían relaciones capitalistas.

El capitalismo internacional reaccionó con alarma ante la revolución boliviana. Ocurrió una tremenda fuga de capitales y se amenazó al país, bajo intrigas en algunos aspectos. Se acordó pagar indemnizaciones a los barones del estaño y a los latifundistas afectados, y los pagos correspondientes se efectuaron con total puntualidad. De un sistema de milicias obreras y campesinas se pasó a la creación de un nuevo ejército. El poder, que al comienzo había estado en manos de las clases trabajadoras, fue transferido paulatinamente a burócratas del partido gobernante. El régimen de Paz aseguró a Estados Unidos que respetaría las inversiones extranjeras y aceptó préstamos y créditos condicionados. Por etapas, se alejó de los trotskistas que lo habían acompañado en la gesta revolucionaria. El ala izquierda del MPR, encabezada por Juan Lechín, se fue distanciando del ala derecha; luego pasaría a la oposición como agrupación aparte, con el nombre de Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista (PRIN).

De esa manera, la revolución boliviana sacudió el orden económico y político establecido en América, pero terminó por ser mediatizada parcialmente por las fuerzas del *statu quo*.

Guatemala y la Décima Conferencia Interamericana

Si en Bolivia, lejos de Estados Unidos, fue posible un cambio nacionalista y democrático relativamente radical, distinta era la situación en Centroamérica, ubicada en la proximidad del centro político dominante del hemisferio y del canal interoceánico de Panamá. En esa zona, los intereses económicos norteamericanos y el propio aparato político y de seguridad de Washington velaron por la conservación del sistema existente y promovieron una acción violenta contra quienes propiciaban cambios sociales y una política nacionalista independiente.

El gobierno reformista de Juan José Arévalo, llegado al poder en 1944, tuvo como sucesor otra administración del mismo Partido Revolucionario Guatemalteco, esta vez bajo la dirección de Jacobo Arbenz, considerado como más izquierdista que Arévalo. Llegado a la presidencia en 1950, Arbenz tuvo la intención de poner

en práctica un proyecto de reforma agraria que liberaría al campesino guatemalteco de una opresión feudal inmutable desde la época colonial. Al mismo tiempo, la reforma agraria afectaría las grandes empresas bananeras, entre las cuales la United Fruit Company era la principal. Las bananeras deberían entregar sus tierras no cultivadas; al mismo tiempo, otras medidas de reforma y de nacionalismo económico tenderían a fortalecer el papel del Estado en la vida económica y a disminuir el poder de los consorcios fruteros que habían manejado los países centroamericanos como haciendas y factorías de su propiedad.

Las compañías, y sobre todo la United Fruit, pusieron el grito en el cielo. El gobierno norteamericano del presidente Dwight Eisenhower y del secretario de Estado John Foster Dulles —vinculado este último a Wall Street y de mentalidad extremadamente conservadora— acogió el punto de vista de las compañías, y consideró que las reformas planeadas por el gobierno guatemalteco eran intolerables y lesivas a los intereses y la seguridad de Estados Unidos. El hecho que se añadió a los factores económico-sociales y que ofrecía a Washington la oportunidad de denunciar al régimen de Arbenz como "procomunista", era de índole político-administrativa. El presidente guatemalteco, a diferencia de su predecesor Juan José Arévalo, no tenía prevenciones ante los marxistas de su país y no veía razón alguna para prohibir que algunos de ellos participaran en las labores del gobierno en funciones asesoras. Al buscar asesores y técnicos capaces, Arbenz resolvió no pelear a quienes eran de mentalidad socialista y podían tener vínculos indirectos con el pequeño Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista). El gobierno de Estados Unidos le señaló que estos hombres estaban en su lista negra y pidió que fuesen destituidos, pero el presidente de Guatemala rechazó esa recomendación.

Desde la Conferencia de Bogotá en 1948, Estados Unidos había tratado de conseguir que el "sistema interamericano" condenara cualquier injerencia del comunismo internacional en los países del hemisferio. En la propia reunión de Bogotá, el grupo de los países democráticos latinoamericanos, que inicialmente no quiso ningún pronunciamiento anticomunista, se dejó vencer por la experiencia del "bogotazo" (levantamiento popular en la capital colombiana, en el cual los comunistas pueden haber desempeñado un papel relevante). Se dijo en esa oportunidad, en el acta final de la conferencia, que "por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo internacional o de cualquier otra doctrina totalitaria es incompatible con el concepto americano de la libertad".

En diciembre de 1950, después de que había estallado la guerra de Corea, el gobierno norteamericano invitó a los Estados de Latinoamérica a celebrar una reunión de consulta de cancilleres con el fin de examinar las medidas que cada país debía adoptar para contribuir a la defensa hemisférica y para prevenir las "actividades subversivas del comunismo internacional". En Guatemala el régimen de Arbenz tuvo, pues, la mala suerte de iniciar su programa de profundización de la revolución democrática y nacional precisamente cuando la tendencia general del mundo occidental era ultraconservadora como consecuencia del ataque norcoreano contra Corea del Sur y la intervención de Estados Unidos bajo la bandera de la ONU en la península coreana.

La IV Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos se llevó a efecto en

Washington en los meses de marzo y abril de 1951, y se adoptó una resolución para que cada país tomara medidas de prevención anticomunista. Ello significó, de hecho, dar luz verde a todas las dictaduras y gobiernos derechistas para que adoptaran el macartismo y desencadenaran una intensa y cruel represión contra los "comunistas" que, las más de las veces, no eran tales, sino demócratas de izquierda partidarios de las reformas sociales y de una mayor independencia económica nacional.

En Guatemala, Estados Unidos mantuvo una línea de ciega identificación con los intereses de la United Fruit Company cuando el gobierno de Arbenz trató de modificar el convenio existente con la empresa, a fin de reducir un poco los exorbitantes privilegios que el dictador Jorge Ubico le había otorgado. La actitud de los representantes norteamericanos en Guatemala fue tipificada primero por el embajador Patterson, quien en 1950 había dicho a Arévalo, según *The New York Times*: "Haré lo posible para que usted no reciba de mi gobierno ni un par de haberes ni un centavo, hasta tanto deje de perseguir a compañías norteamericanas"; y luego por el embajador Peurifoy, quien participó, revólver en mano, en el derrocamiento de Arbenz.

A principios de 1954 la ley guatemalteca de reforma agraria fue aprobada por el Congreso. Bajo la presión de los campesinos ya se había comenzado a repartir tierras en algunas regiones del país. Pero, en general, se trataba de una reforma agraria moderada, sumamente legalista y prudente, que preveía un procedimiento de expropiación lento y complicado, y garantizaba el pago de aceptables indemnizaciones a los propietarios afectados. Sin embargo, esa ley, además de la presunta participación de comunistas en el gobierno de Arbenz, impulsó a Estados Unidos a dar su pleno apoyo a los esfuerzos de los contrarrevolucionarios guatemaltecos para derrocar al gobierno constitucional. Los servicios secretos norteamericanos y el Pentágono comenzaron activamente a entrenar las tropas del coronel Carlos Castillo Armas, guatemalteco de extrema derecha, exiliado en Honduras junto con otros contrarrevolucionarios.

Para tener una base jurídica en la cual apoyar su intervención en Guatemala, Estados Unidos insistió en que la X Conferencia Interamericana (Caracas, a comienzos de 1954) adoptara una resolución anticomunista que, aunque no menoscabara directamente al país centroamericano, no dejara duda alguna en cuanto a la intención. John Foster Dulles llegó a Caracas y se negó a hablar de cualquier tema que no fuese el comunismo: los urgentes planeamientos económicos de los países latinoamericanos serían atendidos por sus adjuntos.

De manera general, la X Conferencia se realizaba bajo condiciones negativas. Caracas era en esos momentos la capital de una de las dictaduras más opositivas del continente, la de Marcos Pérez Jiménez, y los países democráticos de Latinoamérica habían criticado la elección de la capital venezolana como sede. Costa Rica se negó a asistir a la reunión, por rechazo a Pérez Jiménez y solidaridad con los demócratas perseguidos.

El canciller de Guatemala, Guillermo Toriello, tomó la palabra para explicar la política de su país y pedir el rechazo de la resolución anticomunista que iba dirigido contra la soberanía guatemalteca. El discurso elocuente y digno de Toriello mereció grandes aplausos pero, a la hora de votar, la aplastante mayoría de los latinoamericanos siguió a Estados Unidos. Sólo México y Argentina se abstuvieron, en

nombre del principio de la no intervención. El voto de Guatemala fue el único contrario a la resolución. Esta decía que "la dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional (...) constituiría una amenaza contra la soberanía y la independencia política de los Estados americanos, pondría en peligro la paz de América, y exigiría la acción apropiada de conformidad con los tratados existentes".

Los delegados latinoamericanos, al explicar sus votos, dijeron que ellos interpretaban la resolución como de aplicación general, sin referencia a ningún caso específico. Pero sólo los ingenuos podrían ignorar que la resolución se refería a Guatemala. Con este nuevo instrumento jurídico en la mano, los norteamericanos de inmediato redoblaron sus esfuerzos para preparar la intervención armada contra el gobierno de Jacobo Arbenz.

En mayo de 1954 Estados Unidos denunció la presunta llegada a Guatemala de un importante lote de armas checoslovacas. Según los hombres de Washington, el propósito del envío sería el de armar milicias obreras y campesinas que, bajo el mando de elementos marxistas, establecerían una dictadura revolucionaria en el país. Estados Unidos aceleró los preparativos para la expedición de Castillo Armas y, al mismo tiempo, trató de promover una reunión de cancilleres para estudiar el uso de las armas. Guatemala, por su parte, se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Comité Interamericano de Paz para denunciar las amenazas de intervención desde Nicaragua y Honduras. Posteriormente, resolvió pedir su solicitud al Comité de Paz de la OEA porque mientras éste actuaba, las Naciones Unidas no se ocuparían del asunto por presión de Estados Unidos. La Comisión de Paz decidió seguir llevando el asunto, y el Consejo de Seguridad decidió, por cinco votos contra cuatro, que había que agotar los recursos regionales antes de considerar la denuncia guatemalteca en la organización mundial. De este modo, Guatemala quedó a merced del "sistema interamericano" dominado por Estados Unidos.

Las fuerzas contrarrevolucionarias de Castillo Armas invadieron Guatemala el 17 de junio de 1954. Aviones de una compañía filial de la Pan American Airways las transportaron a través de los territorios de los países vecinos hasta la frontera guatemalteca. Aparatos DC-3 piloteados por aviadores norteamericanos bombardearon Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios. Barcos de guerra norteamericanos navegaban entre Jamaica y Centroamérica, listos para descargar miles de infantes de marina en Guatemala si fuese necesario. Pero, pese a toda esta ayuda norteamericana directa y a haber sido adiestrados y armados por el ejército de Estados Unidos, los elementos de extrema derecha que integraban el movimiento de Castillo Armas mostraron una gran incapacidad a la hora del combate, y no lograron su objetivo de avanzar hacia la capital.

Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe militar que el embajador de Estados Unidos, John Peurifoy, organizó en la capital misma. Los militares que sacaron a Arbenz del poder estaban divididos en dos bandos. Uno de ellos, dirigido por el coronel Carlos Enrique Díaz, era de tendencia centrista. Esta corriente favorecía el mantenimiento de algunas de las reformas realizadas por el régimen de Arbenz, así como la continuación de la investigación pedida por el gobierno caído, sobre las amenazas y la agresión externa contra Guatemala. El otro bando militar, encabezado por el coronel Elfego Monzón, era de derecha y apoyaba a Castillo Armas. Al

instalarse Díaz en el gobierno, el embajador norteamericano John Peurifoy, personalmente, revólver en mano y acompañado de los infantes de marina de la marina de Estados Unidos, lo arrestó y lo desalojó del poder, que entregó al coronel Monzón. Este se apresuró a llamar a Castillo Armas para cederle el mando.

Así terminó la operación Guatemala. De conformidad con el espíritu de la época 1948-1957, represivo y de "guerra fría", el centro dominante liquidó al vasallo rebelde que lo había desafiado en el plano de los intereses económicos y políticos.

Las caídas de Vargas y de Perón

Durante el mismo lapso cayeron dos caudillos políticos sudamericanos que en sus respectivos países habían fomentado y dirigido movimientos de masas de orientación nacionalista, opuestos en algunos aspectos al sistema establecido en el hemisferio occidental. Aunque en ambos casos no se conocen aún todos los datos necesarios para determinar en qué medida Estados Unidos influyó en el derrocamiento de esos líderes, o participó en su "desestabilización", no cabe duda de que por lo menos ciertos intereses económicos norteamericanos, junto con sectores oligárquicos de Brasil y Argentina, saludaron con satisfacción la caída de Getulio Vargas y de Juan Domingo Perón.

Getulio Vargas había dejado la presidencia brasileña en 1945, pero quedó en el Senado del país y comenzó en seguida a preparar su retorno a la primera magistratura. Desde 1947 llevó a cabo una fuerte campaña de propaganda a favor de la redistribución del ingreso y la justicia social, así como de una industrialización nacional autónoma. La organización política que más directamente lo apoyaba era el Partido Trabalhista (Laborista) constituido por quienes habían sido sus seguidores más leales en el ámbito sindical, además de antiguos funcionarios de su gobierno. También el Partido Social Demócrata, constituido por elementos de la burguesía empresarial con apoyo de capas medias se basó en la tradición varguista. En la Provincia de São Paulo, el Partido Social Progressista de Adhemar de Barros ofreció igualmente su respaldo a Getulio Vargas. En 1950 Vargas fue designado candidato presidencial por el PTB y el PSP, mientras que el PSD presentó un candidato propio. El viejo caudillo triunfó con el 49% de los votos e inició su presidencia en 1951.

Vargas tomó iniciativas nacionalistas a las cuales se opuso el sector capitalista con vinculaciones foráneas. Las compañías petroleras transnacionales quedaron descontentas por la creación en 1951 de la empresa petrolera estatal Petrobras. Tanto intereses privados nacionales como extranjeros se opusieron al proyecto de nacionalizar la electricidad a través de una empresa estatal, Electrobras. En 1953, la clase capitalista brasileña, así como las empresas foráneas establecidas en el país, protestaron contra los decretos por los cuales Vargas aumentaba los salarios y trataba de controlar los precios. Tanto Vargas como su ministro del Trabajo, João Goulart, hablaban ante las masas laborales del país en un lenguaje radical, considerado peligroso por los sectores conservadores.

El descontento de las clases pudientes y del capital extranjero ante el nacionalismo y el populismo de Getulio Vargas se vio intensificado por una política fiscal tendiente a aumentar los gastos sociales y administrativos mientras no crecían en la

misma medida los gastos para el fomento de la producción. Los sectores populares también se sentían defraudados por la incontentable inflación.

El 1° de mayo de 1954, el presidente Vargas atacó con vehemencia a la alta burguesía brasileña y al capitalismo transnacional, a la vez que anunció el aumento de los salarios mínimos en un 100%. Las clases ricas y los grandes empresarios reaccionaron con gritos de ira y de alarma. El periodista Carlos Lacerda, ex comunista pasado al bando opuesto, intensificó la ponzoña de sus ataques contra el Presidente.

El día 5 de agosto elementos de la guardia presidencial atentaron contra Lacerda. Este escapó con heridas leves, pero un mayor de la fuerza aérea que lo acompañaba resultó muerto. Una ola de indignación se levantó en el país, estimulada por todos los elementos antivarguistas, tanto reaccionarios como liberales. A este propósito, no debe olvidarse que Vargas, caudillo y demagogo, no sólo era combatido por oligarcas que le temían por sus medidas populistas, sino también por demócratas de buena fe y de orientación social progresista.

Desde el discurso del 1° de mayo, elementos militares derechistas conspiraban contra el presidente Vargas. El atentado contra Lacerda sirvió para estimular y acelerar los preparativos golpistas. El 24 de agosto Getulio Vargas, acosado por sus enemigos, se suicidó. Dejó un testamento político en el cual declaró que su fatídica decisión se debía a la insostenible conspiración de fuerzas oscuras, apoyadas por las clases ricas del país y del exterior, contra un hombre que había dedicado su vida a luchar por el pueblo humilde. "Os di mi vida (...) Me sacrifico por vosotros (...). Hoy el paso hacia la eternidad y os dejo mi vida, para entrar a la historia".

No cabe duda que las fuerzas más conservadoras de Brasil y de todo el hemisferio occidental respiraron con alivio al conocer la noticia de la muerte de Vargas. Lacerda y los elementos más derechistas del país trataron de impedir que las corrientes políticas herederas del getulismo llegaran al poder en las elecciones de 1955. Cuando Juscelino Kubitschek, candidato del Partido Social Demócrata con apoyo del Partido Trabalhista triunfó con el 36% de los votos, los sectores militares de extrema derecha, junto con Lacerda y con el apoyo de la gran oligarquía financiera, lanzaron un movimiento golpista contra el reconocimiento de su triunfo. Pero el mariscal Teixeira Lott, demócrata y constitucionalista, se opuso con la mayoría de las fuerzas armadas a la conspiración derechista, y garantizó la toma de posesión de Kubitschek, a comienzos de 1956. Asistido por el vicepresidente João Goulart, trabalhista, el presidente Kubitschek inició una acción gubernamental que reflejaba los intereses de los nuevos sectores empresariales, manufactureros, inicialmente independientes de las compañías transnacionales, aunque luego llegó a asociarse con ellas. Kubitschek comenzó con una reputación de nacionalista y de adversario de Estados Unidos, pero desde el poder comenzó a buscar la colaboración y la amistad del país del Norte.

La caída de Juan Domingo Perón en Argentina, en 1955, fue el producto de una conspiración conjunta de fuerzas conservadoras y oligárquicas con elementos democráticos antidictatoriales. Como Getulio Vargas en Brasil, Perón fue un caudillo demagogo y contradictorio, pero cuya acción, en su conjunto, se dirigía hacia el mejoramiento de la suerte de las mayorías populares y en contra de los grupos privilegiados. Al mismo tiempo, su gestión fue nacionalista y contraria a la hegemonía económica y política de las potencias anglosajonas, aunque en ese plano

tuvo inconsecuencias y debilidades. Desde comienzos de la década de los años cincuenta, la política peronista de grandes gastos para la reforma social tendió a debilitar la producción. Una campaña estatal compraba los productos agrícolas a precios bajos y los suministraba a precios también reducidos a los habitantes de las ciudades. El ingreso de los estancieros —hasta entonces la clase más privilegiada del país— disminuyó y comenzó la descapitalización del campo. Bajo el efecto de la baja de la producción agropecuaria y de los enormes gastos sociales administrativos del gobierno, la inflación hizo su aparición. En 1952 el costo de vida aumentó en un 73% y los salarios sólo en un 35%. En 1953 la tendencia inflacionaria se acentuó aún más. Ello ocasionó un relativo debilitamiento del régimen y vacilaciones en su política.

Durante los años 1946-1954, la doctrina peronista enfatizaba los objetivos antiimperialistas del movimiento. Tanto Estados Unidos como la URSS eran denunciados como portadores de sistemas opresivos y antihumanos, y como potencias imperialistas. Latinoamérica debía luchar por su independencia como entre el capitalismo y el socialismo marxista. El justicialismo representaba la "tercera fuerza" de "socialismo nacional", representaría el sistema de justicia y armonía social apropiado no sólo para el pueblo argentino sino para los de toda Latinoamérica. Para demostrar en la práctica ese afán antiimperialista, Perón dio su apoyo a la Revolución Boliviana de 1952, creó la organización sindical latinoamericana ATLAS en ese mismo año, y en 1954 adoptó una actitud consecuente, de defensa de Guatemala contra el intervencionismo norteamericano, de defensa Interamericana de Caracas. Al mismo tiempo, el nacionalismo económico y el dirigismo del Estado peronista limitaron considerablemente la libertad de acción y el volumen de ganancias de los grupos inversionistas norteamericanos e ingleses y de las compañías transnacionales. Los recursos naturales y las industrias básicas argentinas, así como los grandes servicios y todo lo que afectaba el abastecimiento esencial del pueblo, estaban en manos del Estado, cosa que provocaba la ira de grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, durante 1954 las dificultades económicas se agravaron y la situación del país, Perón decidió dar marcha atrás en sus medidas nacionalistas. Sigilosamente se preparó un proyecto de ley que otorgaría concesiones petroleras a la Standard de Nueva Jersey. Ese gesto marcaría la iniciación de toda una nueva política de mayor flexibilidad ante los intereses extranjeros.

Para compensar ante los ojos de sus seguidores nacionalistas y socializantes estas iniciativas claudicantes, Perón intensificó su radicalismo ideológico y se enredó en un conflicto con la Iglesia. La jerarquía eclesiástica había criticado algunas situaciones de opresión oficial. En octubre de 1954 Perón advirtió a los obispos contra toda interferencia en los asuntos políticos y sindicales del país. Al mismo tiempo, promulgó una ley renovadora sobre la familia, dando igualdad de derechos a los hijos naturales y a los legítimos. La jerarquía protestó, y en noviembre y diciembre varios sacerdotes fueron detenidos por agitación contra el gobierno. Un importante colegio religioso fue intervenido por las autoridades. Los obispos emitieron una enérgica protesta. A principios de 1955 el gobierno peronista legalizó el divorcio y la prostitución. En abril fue eliminada la instrucción religiosa en las

escuelas públicas. Se elaboró un proyecto de ley para terminar con los subsidios a las escuelas confesionales. En mayo comenzaron los preparativos para elegir una asamblea constituyente que redactaría una nueva carta fundamental, que incluiría entre sus principios la separación entre la Iglesia y el Estado.

Mientras el país estaba en convulsión, desgarrado entre peronistas y clericales, con choques violentos en las calles, Perón presentó calladamente al Congreso su proyecto de ley para otorgar concesiones a la Standard por un lapso de nada menos que cuarenta años!

El día de Corpus Christi se desató gran violencia entre católicos practicantes y bandos peronistas. Varios templos fueron atacados. La jerarquía protestó con vehemencia y Perón replicó expulsando del país a dos obispos. El 16 de junio el papa Pío XII dictó sentencia de excomunicación contra Juan Domingo Perón. El mismo día, varias unidades de las fuerzas armadas argentinas se alzaron contra el caudillo nacional, fracasando en su empeño.

Durante los meses de julio y agosto, Perón intentó una reconciliación con sus enemigos, ofreciendo indemnizaciones a la Iglesia y mayor libertad tanto a la oposición política como al capital privado. Pero estos gestos no le valieron de nada, pues fueron interpretados como meras muestras de debilidad por un conjunto de fuerzas —oligárquicas unas, y democráticas otras— decididas a acabar con el régimen justicialista. El 28 de julio Arturo Frondizi lanzó un violento ataque por radio contra Perón y fue arrestado al día siguiente. El 31 de agosto Perón se dio cuenta de que nada le valía retroceder ante sus enemigos. Abandonando las vacilaciones, decidió dar la batalla de frente, a través de un viraje a la izquierda. Hizo al combate a sus descamisados, contra la oligarquía y todos los enemigos internos y externos. El 7 de septiembre, la CGT pidió la creación de milicias obreras. Las fuerzas armadas reaccionaron contra tal eventualidad. El 16 de septiembre se produjo un levantamiento militar decisivo, bajo la jefatura del general Lonardi. Después de duras batallas, el gobierno cayó, y Perón buscó refugio a bordo de una cistifonera paraguaya, como lo había hecho 103 años antes, en un barco inglés, su predecesor Juan Manuel Rosas.

Se estableció en Argentina un gobierno provisional presidido por el general Aramburu. Fue el fin de un régimen personalista y demagógico, pero orientado en sus líneas generales hacia el nacionalismo económico y a un mayor grado de justicia social.

Resumen

Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial comenzó a desintegrarse la Gran Alianza entre las potencias anglosajonas y la URSS. Surgió la llamada guerra fría, basada en una estructura bipolar extrema del sistema internacional.

Hasta 1947, en Latinoamérica se mantuvo la tendencia que había comenzado a surgir durante la Segunda Guerra Mundial, de ascenso de las fuerzas populares y de lucha por una mayor autonomía nacional. Pero a partir de 1948 las presiones norteamericanas "anticomunistas" efectuaron el gran viraje latinoamericano hacia un conformismo conservador, basado principalmente en gobiernos de fuerza. Sólo en Costa Rica se avanzó hacia una mayor democratización y, en Bolivia, caso

— Tabla 8 —

Tabla cronológica VIII

Año	Area del Caribe	América del Sur	Relaciones internacionales
1946	Junta revolucionaria en Venezuela (desde octubre 1945).	Derrocamiento y asesinato de Villarreal.	
1947			Firma del TIAR.
1948	El "bogotazo". Figueres al poder en Costa Rica. Choque armado Costa Rica-Nicaragua. Derrocamiento de Rómulo Gallegos en Venezuela.		IX Conferencia Interamericana; creación de la OEA.
1949	Disputa Haití-Santo Domingo. Legión del Caribe.		
1950	Golpe de Magloire en Haití. Arbenz, presidente de Guatemala.	Getulio Vargas electo presidente de Brasil.	
1951			Creación de Petrobrás.
1952			Revolución boliviana.
1953			Problema del asilo de Haya de la Torre en Perú.
1954	Intervención y contrarrevolución en Guatemala.	Suicidio de Getulio Vargas. Conflicto de Perú con la Iglesia.	X Conferencia Interamericana en Caracas.
1955	Choque Costa Rica-Nicaragua.	Derrocamiento de Perón.	

decepcionada, tuvo lugar una auténtica revolución en 1952. Sin embargo, esa revolución no pudo resistir a dificultades y presiones, y se transformó gradualmente en un proceso reformista con participación norteamericana.

A partir de 1953, con el ascenso en Estados Unidos de una corriente política más derechista que la anterior, se intensificó el apoyo norteamericano al dictadurismo fascista en América Latina. El régimen autocrático reformista y popular de Guatemala fue aplastado por Estados Unidos y la oligarquía centroamericana en nombre de la "defensa contra el comunismo". Los caudillos nacionalistas de Brasil y de Argentina, que en diversas oportunidades habían manifestado su independencia frente a los dictados de los dirigentes del "mundo libre", cayeron en 1954 y 1955. Para 1957 el hemisferio se encontraba mayoritariamente dominado por las fuerzas del conformismo "occidentalista" y de la represión antipopular. Sin embargo, ese mismo año aparecieron los primeros síntomas de cambios liberadores.